

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

DECIMOQUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2024

En las oficinas que ocupa la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicada en Av. Muñoz No. 650 Colonia Condesa en la planta alta de la Plaza Muñoz, capital del Estado de San Luis Potosí, se dieron cita a partir de las 13:15 trece horas con quince minutos del día de la fecha, para la celebración de esta Decimoquinta Sesión Extraordinaria, debidamente convocadas, las siguientes personas; Licenciada Yohana Aguilar Espinosa, Secretaría Técnica, Licenciada Tania Citlali Rico Flores, Vocal, Licenciado Mario José Tinoco Regalado, Presidente y como invitado permanente el Licenciado Rafael Omar Martínez Rodríguez Contralor del Órgano Interno de Control, lo anterior con la finalidad de desahogar el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia, Declaración de Quórum legal y validez de la sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Asuntos a tratar.

3.1 Análisis y en su caso confirmación de la clasificación de la información como reservada respecto al desglose del recurso destinado al programa "MI PASE" presentado por parte de la Dirección de Administración y Finanzas, a través del oficio número SCT/DAF/707/2024, de fecha 21 veintiuno de octubre de 2024 dos mil veinticuatro. Lo anterior para dar contestación a la solicitud de acceso a la información pública que describe en el acuerdo de reserva, registrada dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 241229824000167.

4. Asuntos Generales.
5. Cierre de la sesión.



Acto continuo se procede al desahogo del orden del día en los términos que a continuación se indican:

UNO. - Lista de Asistencia, Declaración de Quórum legal y validez de la sesión - Para el desarrollo de la reunión se tomó lista de asistencia y se determina la existencia del quórum legal necesario para la realización de la misma.

DOS. - Lectura del orden del día y su aprobación. - La Secretaría Técnica Yohana Aguilar Espinosa, somete a consideración de los integrantes del Comité la aprobación del orden del día mencionada.

Aprobándose por unanimidad de votos por los miembros del Comité de Transparencia, el orden del día señalado.

En consecuencia, con número de **Acuerdo SCT/CT-01-SE/25-10/2024** se aprueba por Unanimidad de Votos de los presentes el orden del día.

TRES. - Asuntos a tratar.

3.1 Análisis y en su caso confirmación de la clasificación de la información como reservada respecto al desglose del recurso destinado al programa "MI PASE" presentado por parte de la Dirección de Administración y Finanzas, a través del oficio número SCT/DAF/707/2024, de fecha 21 veintiuno de octubre de 2024 dos mil veinticuatro. Lo anterior para dar contestación a la solicitud de acceso a la información pública que describe en el acuerdo de reserva, registrada dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 241229824000167.

En uso de la voz, el Licenciado Mario Tinoco Regalado, en su calidad de Presidente de este Comité, con fundamento en los artículos 44, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3° fracción XXI y XXIX, 52 fracción II, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120 fracción I, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129 fracción XI, 130, 132 y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, los lineamientos

primero, segundo fracción XIII, cuarto, quinto, séptimo, octavo, décimo quinto, vigésimo noveno, trigésimo tercero y trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, procede a desglosar el estudio presentado por la Dirección a su cargo a fin de que se confirme la clasificación de la información como reservada:

I. ANTECEDENTES.

I.I El 08 de octubre del presente año, la Unidad de Transparencia de esta Secretaría tuvo a bien, remitir a esta Dirección a mi cargo, solicitud de información registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia bajo el folio 241229824000167.

II. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

II.1. Ahora bien, del análisis de la solicitud de acceso a la información pública, se advierte que el solicitante pide la cantidad y el desglose del proyecto "mi pase".

De lo anterior, se puede advertir que el hoy solicitante pretende conocer la cantidad presupuestaria a un programa social de Gobierno del Estado.

Asimismo, en lo que respecta al "desglose" esta Dirección no es omisa en señalar, que de conformidad con la definición que nos enuncia la Real Academia Española se entiende que el solicitante pretende conocer la forma en la cual se ha empleado el recurso presupuestario.

II.2. Causa de pedir en la solicitud de información.

Ahora bien, en atención al principio de eficacia previsto en el artículo 8°, fracción 113 de la Ley de Transparencia, se debe de atender a lo que realmente el solicitante pretende acceder como información y, no lo que dijo de forma expresa, esto con la intención de evitar formalismos técnico-jurídicos innecesarios que los solicitantes no están obligados saber.



De ahí, esta dirección advierte que, dentro del presupuesto del periodo actual no existe programa con dicha denominación, sin embargo, "Mi pase" es un programa de esta Secretaría que se lleva a cabo con recurso destinado en 2022 denominado "1er etapa de Transporte Público Urbano Gratuito para Jóvenes Universitarios" motivo por el cual se atenderá de conformidad con la información almacena.

III. COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Ante todo, para determinar la competencia de esta área para conocer de solicitud de acceso a la información pública, respecto del recurso público es necesario narrar lo siguiente:

III.1. De conformidad con las facultades conferidas en el artículo 36 BIS fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, esta Secretaría es la responsable de programar la operación anual que respalde el presupuesto solicitado y aprobado por el titular del Ejecutivo dentro de las funciones que desarrolle la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

III.2 Concatenado a la normativa en cita, el artículo 14 del Reglamento Interno de esta Secretaría otorga las facultades a esta área para la administración, intervención y elaboración del presupuesto asignado y aprobado a este ente público.

IV. COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA PARA CLASIFICAR LA INFORMACIÓN.

Como ya se dijo, el ocho de octubre de dos mil veinticuatro la CEGAIP recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia la solicitud de acceso a la información pública, citada al rubro, en donde un solicitante pidió lo siguiente:

"¿Cuánto presupuesto se llevó el proyecto de 'mi pase' desglosado?" sic

Así, se está en el supuesto del artículo 120, fracción I de la Ley de Transparencia, pues es necesario que esta área a mi cargo, al recibir una solicitud de acceso a la información pública, analice la clasificación de la reserva de la información.

V. JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA.

Ahora, derivado de la solicitud de acceso a la información pública citada en el antecedente, fue necesario llevar a cabo el análisis correspondiente sobre la información contenida en los archivos de esta área a mi cargo, en atención al Derecho de Acceso a la Información Pública.

VI. ACTUALIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA QUE SUBSISTEN LAS CAUSAS DE RESERVA DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESGLOSE DEL RECURSO PUBLICO DENOMINADO "1ER ETAPA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO GRATUITO PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS", ASÍ COMO LA CLASIFICACIÓN DE EXPEDIENTES QUE DEBEN TENER EL CARÁCTER DE RESERVADOS.

Ahora bien, para efecto de determinar lo anterior, cumplo con los requisitos de los artículos 118 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado en cuanto a la forma y fondo de la reserva de la información y sus causas.

VI.1. La fuente y el archivo donde se encuentra la información.

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento Interno de esta Secretaría, esta Dirección es la encargada de administrar el presupuesto, por lo cual la fuente, es el archivo donde se encuentra la información de los expedientes financieros.

Lo anterior virtud de que esta área es la facultada el resguardo de los documentos financieros.

VI.2. La fundamentación y motivación del acuerdo.

- a) Fundamentación. En el caso son aplicables en cuanto a la forma del presente acuerdo de reserva los artículos 3°, fracción XXI, 24, fracción



13

Amador

V, 113, 114, 115, fracción I, 117, 118, 119, 120, fracción I, 122, 127, 128, 129 fracción XI y 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

- b) Fundamentación. También, en cuanto al fondo del asunto son aplicables los artículos 36 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y artículo 14 del Reglamento Interno de esta Secretaría.
- c) Motivación. La motivación será expuesta al momento en que se cumplan los requisitos de procedibilidad de la reserva, tal y como se verá más adelante.

VI.3. El documento, la parte o las partes de los mismos, que se reservan.

Se reservan los documentos que amparan el destino del recurso público derogado bajo el programa denominado "1er etapa de Transporte Público Urbano Gratuito para Jóvenes Universitarios".

VI.4. El plazo por el que se reserva la información.

En el caso, la reserva de la información es por el plazo de cinco años, por lo tanto, el plazo máximo concluirá en el año dos mil veintinueve.

Dicho plazo es el estrictamente necesario para proteger la información mientras subsistan las causas que dieron origen a la clasificación, en virtud de que la información forma parte de las investigaciones de un hecho que la ley señale como delito y se encuentra tramitado ante el Ministerio Público.

Sin embargo, el tiempo de la reserva de la información, incluso puede dejar de subsistir antes del tiempo mencionado, pues como se dijo, es el estrictamente necesario y en cuanto se determine los hechos motivos de investigación, el plazo e incluso la reserva de la información pudiera quedar sin efectos, previa aprobación del Comité de Transparencia.

VI.5. La designación de la autoridad responsable de su protección.



En el caso es la Dirección de Administración y Finanzas

VI. 6. Número de identificación del acuerdo de reserva.

Esta fracción corresponde a la Unidad de Transparencia, quien es quien lleva el consecutivo de los acuerdos de reserva.

VI. 7. La aplicación de la prueba del daño.

Para efecto de demostrar lo anterior, en el caso la causa de reserva de la información es la prevista en el artículo 129, fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, que reza:

“ARTÍCULO 129. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: (...)

XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y (...)” sic

Así pues, dicho artículo permite clasificar la información como reservada cuando se encuentre contenida dentro de investigaciones de hecho que la Ley señale como delito y se tramite ante Ministerio Público.

Ahora bien, además de demostrar la fracción citada, también es necesario acreditar la prueba de daño de conformidad con los artículos 117, segundo párrafo y 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Por ello, antes de entrar a la prueba de daño, es necesario definir qué se entiende por la conducción de la investigación, en ese tenor, de conformidad con los artículos 106 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y artículo 2 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, señala que la divulgación de la información afectaría las acciones de procuración de justicia, los actos de investigación, comprometiendo con ello la seguridad, el debido proceso, y dignidad de las personas que son sujetas de procedimiento penal.



De lo anterior, la obstaculización de los actos de investiga, afectando, el debido proceso que se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, con la finalidad de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.

Así, el debido proceso se compone de diversos requisitos que deben observarse en todas las instancias procesales con la finalidad de que el mismo pueda materializarse y efectivizarse en beneficio de los justiciables, reflejándose en:

- i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables.
- ii) el desarrollo de un juicio justo, y
- iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure su solución justa.

Por su parte, el derecho a gozar de una defensa adecuada, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un componente central del debido proceso que obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo.

Por ello, al tratarse de actos de investigación que recaen en una persona física, ésta tiene derecho a que se haga conocedor de tal determinación.

De ahí que, en términos de los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe de dar la seguridad jurídica en cuanto al debido proceso, como derecho de la persona a quien se le inicio una carpeta de investigación para que, desde luego, la conozca.

Así pues, en el caso están acreditados los elementos del lineamiento trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, de conformidad con lo siguiente:



Por lo que toca a la fracción I, del citado lineamiento, está demostrada que el destino del recurso publico motivo de solicitud, existen un juicio que se encuentra en trámite por ser de un proceso de investigación judicial.

En lo que se refiere a la fracción II, de igual forma, también está acreditada dado el destino del programa en cita, se encuentra en diversas constancias que forman parte del procedimiento.

Por su parte, la fracción III, interpretada contrario sensu, también está demostrada, porque en el caso, se trata de que difusión afecte o interrumpa la libertad de decisión de las autoridades dentro del juicio.

Así pues, el derecho al debido proceso encuentra reconocimiento en normas de rango constitucional y convencional (artículos 14 de la Constitución General y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y consiste en un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales con la finalidad de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.

Pues bien, expuesto lo anterior, ahora mediante el presente apartado cumplo con los requisitos específicos del artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado en cuanto a la:

VI.8. Prueba de daño.

- a) **Que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.**

Se debe de partir que, de proporcionar la información a terceros se pudiera obstaculizar las investigaciones realizadas por el ministerio público, implicando una posibilidad de que suceda que dichos terceros ajenos a la investigación la conozcan antes que el responsable y, ello afecte el debido proceso.

a1) Riesgo real. En el caso, de darse a conocer esa información a terceros ajenos al personal imputado, es objetivo el riesgo, pues por ese sólo hecho se



afecta el derecho al debido proceso del responsable de que sea él, primero quien conozca las causas por las cuales le inicio una investigación. Lo anterior en atención a que el imputado es parte de procesos de investigación.

a2) Riesgo demostrable. Por lo que toca a este punto, la reserva de la información significa que la misma está expuesta, ya que se trata de una determinada cuestión procesal como lo son actos de investigación en la persecución de un delito. Lo anterior no puede entenderse como un blindaje del derecho de acceso a la información pública, sino de cumplir con otro principio que es el de seguridad jurídica, en virtud de que de los análisis de los expedientes materia de la reserva de la información, consta que efectivamente se pudiera entorpecer la etapa de investigación, de ahí que, ante ello, se demuestra la afectación del derecho al debido proceso.

a3) Riesgo identificable. En este asunto, esa contingencia de probabilidad de daño es identificable, ya que de darse a conocer el destino del recurso, se conocerían los datos necesarios para encuadrarlos con el tipo penal, mismo que pudiera ser motivo para evadir la ley.

b). El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.

De acuerdo con lo expuesto en el inciso a), es necesario precisar ¿qué se entiende por interés público?

La respuesta a la anterior interrogante, nos la proporciona el artículo 34 fracción XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de San Luis Potosí, pues por interés público debe entenderse la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados.

Ahora, bien de conformidad con el artículo 84 fracción IV de la normativa en cita, obliga a todos los sujetos públicos, transparentar de manera periódica La información de los movimientos de ingresos y egresos conteniendo datos mínimos como el es monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y funcionario que lo autoriza. En el caso de ingresos, el número de entero, monto, concepto, contribuyente y fecha, así como las cuentas



bancarias productivas específicas en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos por cualquier concepto, durante el ejercicio.

Empero, en los casos de los expedientes materia de la presente reserva, existe la posibilidad de que se materialice un menoscabo en el derecho del responsable en la etapa de investigación, o sea, que por otro medio (como la publicidad de la información) él conozca los medios de prueba que asisten en su contra para la encuadrarse en el tipo penal.

De ahí que, de momento no debe de ser pública en lo que toca el destino o desglose del fondo del recurso denominado "1er etapa de Transporte Público Urbano Gratuito para Jóvenes Universitarios".

Por lo que se concluye que, hasta en tanto la autoridad responsable no concluya la etapa de investigación y cause ejecución, se compromete el debido proceso a que éste tiene derecho y, por ello, se reitera, de momento, el riesgo en cuanto al menoscabo de proporcionar la información supera el interés público general de que se difunda, pues de momento prevalece la etapa de investigación, antes de que el público en general conozca esa determinación.

c). La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Ya se ha dicho que, con la reserva de la información se está ante una excepción del derecho de acceso a la información pública, es decir, frente a una limitación a ese derecho.

Luego, esa limitación, debe ser adecuada al principio de proporcionalidad, entendido éste como el que irradia y aplica sobre la totalidad de los derechos humanos con fundamento en el artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora, para lo anterior, se debe de establecer el respectivo test de proporcionalidad (fin legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido).

Sobre lo anterior, la medida de la reserva de la información está prevista en el propio artículo 6º, cuarto párrafo, fracción I, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se significa que persigue un

fin constitucionalmente válido y legítimo, en el sentido de que, la propia Constitución prevé una excepción al derecho de acceso a la información.

c). I. Idoneidad. La reserva de la información, de momento es la más adecuada para cumplir con dicha finalidad que se pretende y que es el debido proceso.

En efecto, por lo pronto y, de manera temporal la reserva de la información es la medida adecuada y adoptada como preferente frente al derecho de acceso a la información, dado que el darle a conocer al imputado los medios de prueba con los que se cuentan en su contra, , ya que el fin o principio que se persigue es el de seguridad jurídica.

En ese contexto la clasificación de la información persigue un fin constitucionalmente valido consistente en evitar que se entorpezca la investigación realizada por el Ministerio Público a fin de encuadrarlos con el tipo penal, en beneficio de su seguridad jurídica sobre el derecho de las personas a ser informadas.

Dicho estándar probatorio es idóneo para la consecución del fin, porque evita que se conozcan los elementos de prueba con los que se cuentan.

c). II. Necesidad. En el caso no existe un medio alternativo que sea menos lesivo a la apertura de la información.

Sin duda, existe una justificación válida y racional, para acotar el derecho de acceso a la información, valido porque el responsable tiene derecho a un debido proceso que incluso, como ya se vio, está previsto en los propios artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, racional porque se trata de una medida restrictiva de carácter temporal, esto es, que no es absoluta la reserva de la información e, incluso como se dijo en la temporalidad, la misma puede darse a conocer incluso antes de que concluya el plazo de reserva, además de que es racional porque no existe disposición, ni constitucional, ni legal que autorice una reserva absoluta y, sobre todo por tiempo indefinido.

c). III. Proporcionalidad. En el caso existe un equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, porque la decisión tomada de reservar la información también representa un beneficio mayor, incluso a la propia sociedad interesada en acceder a este tipo de información, ello en el sentido de

que, también ésta está interesada en que se respeten todos los postulados y principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el caso el de seguridad jurídica, pues no se pretende que con garantizar un principio de máxima publicidad para acceder a las medidas de apremio antes de que sea conocidas por el responsable, a éste no le sea garantizado su derecho al debido proceso, pues ambos principios están previstos en el Pacto federal y, los mismos no se contraponen, sino por el contrario se armonizan.

De ahí que el salvaguardar de manera momentánea el derecho al debido proceso, de igual manera representa un beneficio a la población, dado que se patentiza que, el derecho humano de acceso a la información no se debe de garantizar de manera indiscriminada, en todos los supuestos e incluso sobre otros derechos, en virtud de que su ejercicio debe de ser precisamente conforme a los propios postulados constitucionales y, para ello precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la excepción del derecho de acceso a la información justamente mediante la reserva de la misma.

Por ello, la restricción prevista mediante el artículo 129, fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado sobre las constancias que se encuentren contenidas dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, entendido éste como un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, lo adecuado es reservar los medios de prueba con los que la Fiscalía cuenta para encuadrarlo en el tipo penal, pues sólo así puede evitarse algún tipo de violación hasta en tanto sea notificado del resultado de tal del tipo penal comprobado.

Portanto, si la reserva de la información, es en cuanto a la temporalidad, sobre la inmediatez o dilatación en la investigación, esa reserva tiende fundamentalmente a salvaguardar los procedimientos de investigación llevados por la Autoridad competente en cuanto al debido proceso se refiere.

Derivado de lo anterior, es que se solicitó que se confirme el carácter de reservada la información por encontrarse contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramita ante el Ministerio Público, causa de reserva de la información hasta en tanto no



concluya la investigación que podría encuadrar en un tipo penal por actos de corrupción, pues hasta en tanto no suceda lo anterior, debe de seguir la reserva, en el entendido de que.

Sometiéndose a consideración de los presentes el punto expuesto;

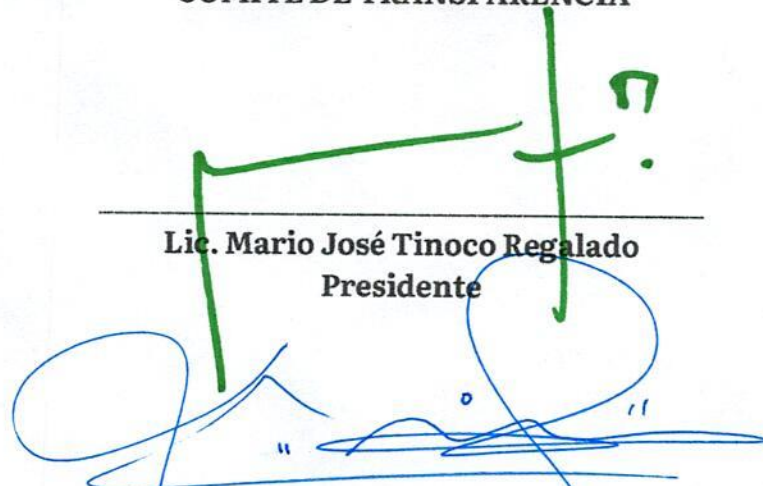
Siendo este aprobado por unanimidad de los integrantes del Comité de Transparencia que en este acto comparecen a acordar.

Con número de **ACUERDO SCT/CT-02-SE/25-10/2024** se procede a confirmar que los documentos que respaldan el desglose del recurso destinado al programa "Mi pase" tiene carácter de reservados, por unanimidad de votos de los miembros presentes del Comité de Transparencia, presentada por la dirección de Administración y Finanzas de esta Secretaría, a través del oficio número SCT/DAF/707/2024 de fecha 21 de octubre de 2024 dos mil veinticuatro. Lo anterior a fin de atender la solicitud de información presentada dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia bajo el folio 241229824000167.


CUATRO. - Asuntos Generales: El Presidente del Comité, invita a los integrantes que deseen tomar la palabra para tratar algún otro tema, sin que nadie se pronuncie respecto de ningún tema pendiente.

CINCO. - Cierre de sesión: No habiendo más asuntos por tratar, se da por terminada la presente sesión a las 14:05 catorce horas con cinco minutos del día de su celebración, firmando los integrantes presentes del Comité de Transparencia para los efectos legales a que hubiere lugar.


COMITÉ DE TRANSPARENCIA



Lic. Mario José Tinoco Regalado
Presidente

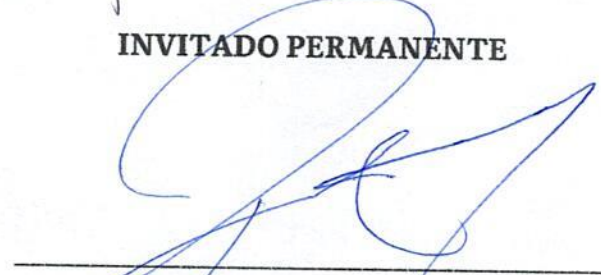


Lic. Yohana Aguilar Espinosa
Secretaría Técnica



Tania Citlali Rico Flores
Vocal

INVITADO PERMANENTE



Lic. Rafael Omar Martínez Rodríguez
Contralor del Órgano Interno de Control

LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2024.

"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"